

Crisis habitacional: IPP propone medidas de planificación urbana

SOCIEDAD. Cuando se incorpora a la población residente en campamentos, la tasa de pobreza regional sube desde un 10,6% hasta un 12,2%, dice el análisis.

Redacción

cronica@mercurioantofagasta.cl

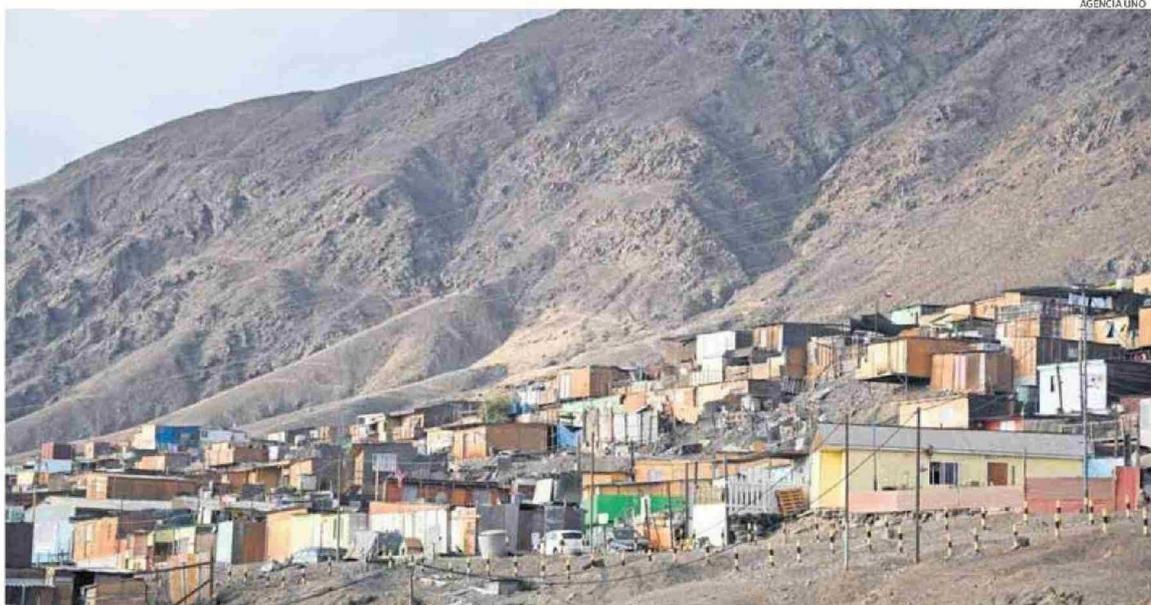
La sostenida expansión de campamentos ha marcado la última década en la Región de Antofagasta. Entre 2013 y 2025, el número de hogares en asentamientos informales creció más de un 700%, revelando la crisis habitacional que hoy afecta a más de 15.800 familias, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 elaborado por Teco-Chile.

Las comunas de Antofagasta, Calama, Taltal y Tocopilla concentran 154 de estos asentamientos activos, muchos de ellos convertidos en macrocampamentos, con más de 500 hogares organizados.

PRECARIEDAD URBANA

Los indicadores sociales reflejan el impacto de esta realidad. La tasa de pobreza regional aumenta de un 10,6% a un 12,2% al incluir a la población en campamentos. El acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento presenta brechas críticas: solo el 7,8% de los hogares está conectado al alcantarillado, y más del 63% depende de métodos informales para acceder al agua.

A esto se suma que el 77% de los hogares obtiene electricidad por conexiones irregulares, con riesgos constantes de cortes e incendios, destacaron Paulina Ponce-Philimon, geógrafa y Juan Páez Cortés, economista, ambos investigadores del Instituto de Políticas Públicas, quienes elaboraron el informe "Vivir en el margen:



LA LÓGICA DE MERCADO ENCARICÓ EL SUELO Y EXPULSADO A LOS SECTORES A ZONAS PERIFÉRICAS, SE DICE.

"La campamentación no puede seguir tratándose como un fenómeno marginal. Se requiere una planificación metropolitana, con justicia urbana y enfoque de derechos".

Ponce Philimon y Páez
 Investigadores IPP UCN

campamentos y desigualdad en Antofagasta (2024-2025)".

A partir de ello, los investigadores propusieron una serie de medidas de planificación urbana preventiva y participativa, que incorpore criterios de justicia espacial y una lectura integral de las dinámicas migratorias, laborales y territoriales que dan forma a los campamentos.

"Las estrategias con visión de largo plazo deben ser capaces de: Identificar y habilitar suelo urbanizable en zonas consolidadas con rapidez; regularizar servicios básicos con soluciones transitorias viables; diseñar planes de radicación en articula-

ción con gobiernos locales; incluir activamente a la población migrante en los programas de vivienda y dotar de infraestructura suficiente y permanente a las zonas periurbanas".

PLANES HABITACIONALES

El asunto se amplifica con la lenta respuesta sectorial. El Plan de Emergencia Habitacional (2022-2025), tiene un avance limitado. Solo el 3% de las familias ha recibido una solución habitacional formal. Actualmente, se convitalizan apenas 10 proyectos en la región (siete en ejecución y tres finalizados), bene-

ficiando a 473 familias.

"Esta baja cobertura refleja no solo la lentitud en la ejecución de soluciones estructurales, sino también la desconexión entre la magnitud del fenómeno y la escala de respuesta institucional", dijeron Ponce-Philimon y Páez.

Además, el 71,8% de los campamentos está emplazado en suelos no edificables, lo que complica su radicación y urbanización. Esto, sumado a la falta de planificación preventiva y una respuesta institucional fragmentada, ha permitido que el fenómeno siga expandiéndose sin freno.

Este proceso acelerado de informalización urbana, impulsado por el encarecimiento del suelo, la falta de acceso a subsidios y el aumento de la migración, pone en evidencia que las estrategias actuales han fracasado en frenar el crecimiento de asentamientos precarios, subrayaron los investigadores.

"La lógica de mercado ha encarecido el suelo y expulsado a los sectores populares a zonas periféricas, sin planificación ni servicios. Es una urbanización por omisión del Estado", apuntaron los investigadores del IPP-UCN. 